



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

1

DEMANDANTE:	Blanca Doris Ramírez Sosa
DEMANDADA:	Colpensiones, Protección S.A.
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Confirma
Radicado	05001-31-05-010-2021-00056-01 (008) 05001310501020210005601

Medellín, a los catorce (14) días de junio de dos mil veintitrés (2023).

En la fecha indicada, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **Luz Amparo Gómez Aristizábal**, **María Eugenia Gómez Velásquez**, y **Claudia Angélica Martínez Castillo**, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación de Colpensiones así como el grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de este, en el proceso ordinario laboral adelantado por la señora **Blanca Doris Ramírez Sosa** en contra de **Colpensiones y Protección S.A.**, frente a la decisión adoptada en primera instancia.

Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA.

I. ANTECEDENTES:

1.1 PRETENSIONES.

La señora Blanca Doris Ramírez Sosa presentó demanda en contra de Colpensiones y Protección S.A., buscando se declare la nulidad y/o ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS), realizada a través de Protección el 1º diciembre de 1996, disponiendo la

reactivación automática de su vinculación al Régimen de Prima Media (en adelante RPM); que se condene a Protección S.A. a trasladar a Colpensiones todos los valores que se encuentren en la cuenta de ahorro individual del demandante, incluidos los rendimientos y cuotas de administración y las costas del proceso.

1.2 HECHOS.

2

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 27 de octubre de 1961; que se afilió al ISS hoy Colpensiones el 28 de octubre 1985 donde realizó aportes hasta el 30 de noviembre de 1996 cotizando un total de 221.8 semanas; se trasladó al RAIS administrado por Protección S.A., el 1° de diciembre de 1996, realizando cotizaciones por 974 semanas para un total, al 30 de enero de 2021, de 1.195,8 semanas cotizadas; que le informaron en protección que de permanecer en el RPMPD no alcanzaría la pensión de vejez sino la indemnización sustitutiva, por lo que realizó la proyección de la prestación en ambos regímenes y en Colpensiones la misma alcanzaría un monto aproximado de \$2.741.221 a partir del 1° de marzo de 2023, fecha en la cual acreditaría 1302 semanas cotizadas y 61 años; Finalmente, indica que presentó reclamación administrativa a Colpensiones el 1° de febrero de 2021, la cual fue resuelta de manera desfavorable y que al momento de su traslado inicial al RAIS no recibió información completa por parte de Protección, donde su pensión de vejez se verá reducida en un 64.8% frente a la prestación en el RPMPD.

1.3 CONTESTACIÓN DEMANDADAS.

Admitida la demanda e integrada la litis, las demandadas allegaron respuesta oportuna, así:

Colpensiones aceptó como cierta la fecha de nacimiento de la actora, la afiliación a la entidad y las cotizaciones realizadas conforme a la historia laboral aportada, que la demandante solicitó el 1° de febrero de 2021 traslado al RAIS el cual fue negado por encontrarse a 10 años o menos del requisito de tiempo para obtener la pensión de vejez; que no le constan los aportes realizados en el RAIS a otras entidades por ser hechos con terceros que deben ser probados en el proceso, ni las asesorías recibidas al momento del traslado. Se opuso a las pretensiones de la demanda proponiendo las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, ausencia de prueba de engaño, equivocada

información y perjuicio padecido, indebida aplicación de la carga probatoria, desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, buena fe, prescripción, inexistencia de la nulidad de traslado de régimen pensional, inexistencia de la obligación de reconocer la afiliación al rpm por falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de legitimación en la causa por pasiva y la innominada.

3

Protección S.A. aceptó como cierta la edad del demandante, no le consta su afiliación a Colpensiones y las cotizaciones realizadas, pero conforme a la historia laboral aportada la demandante ha cotizado un total de 1232.43 semanas, considera que la afiliación se surtió de manera libre y voluntaria y que brindó toda información sobre las consecuencias del traslado encontrándose válidamente afiliada al RAIS. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones de Inexistencia de la Obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, aplicación del precedente sobre los actos de relacionamiento al caso concreto, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: Inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe y la innominada o genérica.

1.4 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2022, dispuso:

PRIMERO: DECLARAR ineficaces los cambios de sistema pensional que realizaron (...), BLANCA DORIS RAMÍREZ SOSA (...) al afiliarse al RAIS provenientes del RPM; en consecuencia, declarar que todos aquellos han permanecido afiliados sin solución de continuidad al RPM administrado hoy por COLPENSIONES.

SEGUNDO: CONDENAR a PROTECCIÓN S.A a trasladar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia a COLPENSIONES el saldo existente en las cuentas de ahorro individual de (...), BLANCA DORIS RAMÍREZ SOSA (...) con sus correspondientes rendimientos financieros, frutos e intereses y el bono pensional si ya fue redimido. Asimismo, con indexación trasladará en el mismo término lo descontado de las cotizaciones de las personas referidas, conceptos tales como lo destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, los gastos de administración y el valor de las primas del seguro previsional y reaseguros.

Al momento de cumplirse estas órdenes, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a recibir de PROTECCIÓN S.A., los valores aludidos, e incorporarlos como aportes pensionales en las historias laborales de cada uno de los demandantes, imputándolos a los periodos en que fueron cotizados en el RAIS y de acuerdo al IBC que fueron aportados, cotizaciones que habrán de tenerse como semanas válidamente aportadas para el futuro reconocimiento de las prestaciones económicas del sistema de protección social en pensiones que lleguen a causarse.

CUARTO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción. Las demás están implícitamente resueltas.

QUINTO: CONDENAR en costas a PROTECCIÓN S.A. y en favor de cada uno de los demandantes, se fijan las agencias en derecho en \$1.000.000 para cada uno. Sin costas a cargo de Colpensiones.

SEXTO: CONCEDER el grado de consulta en favor de Colpensiones ante la SL del TSM, en el evento de que no haga uso de alzada.

1.5 RECURSO DE APELACIÓN.

Colpensiones presentó recurso de apelación, precisando que no es cierto que la demandante no haya obtenido información al momento del traslado y acumula un numero máximo de cotizaciones en el RAIS, por lo que corresponde a Protección estudiar y pagar la eventual prestación en favor de la actora y su única motivación para retornar el RPMPD es la diferencia entre las mesadas pensionales con base en predicciones hipotéticas, teniendo en cuenta además que el consentimiento para el traslado fue voluntario y realizó cotizaciones por un gran número de semanas y pese a tener la oportunidad de retornar al régimen anterior no lo hizo, apoyó su recurso igualmente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la sostenibilidad del sistema pensional y solicita se revoque la sentencia.

2. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Colpensiones, presentó sus alegatos solicitando se modifique la decisión por cuanto la parte demandante no acreditó los supuestos de hecho y de derecho para la declaratoria de Ineficacia de la afiliación al RAIS, el análisis de la información suministrada por la AFP y el alcance de la asesoría que debió brindar al momento de la afiliación, las cuales deben ser valoradas bajo la normatividad vigente para la fecha de suscripción del formulario y materialización del traslado, no resulta razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y

soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del cambio de régimen.

La actora realizó su traslado inicial en 1996, debiendo asumir las consecuencias jurídicas de permanecer en el RAIS y que el fondo al cual está afiliada y al que cotiza para su vejez sea quien cubra la eventual pensión, además una declaración injustificada de ineficacia del traslado de un afiliado del RPM a RAIS afecta la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los afiliados.

Finalmente, indica que, de confirmarse el traslado, las AFP deben regresar la totalidad de los aportes sin ningún descuento y debidamente indexados y solicita la adición de la providencia para que Protección asuma la diferencia en caso de que los aportes trasladados resulten inferiores al valor correspondiente más los rendimientos que se hubieran generado en caso de que la demandante hubiera permanecido en el RPMPD. Solicita no se imponga condena en costas a la entidad en ninguna de las instancias por haber obrado de buena fe.

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 PRESUPUESTOS PROCESALES Y ALCANCE DEL RECURSO

Conoce la Sala del recurso de apelación y de la consulta de la sentencia a favor de Colpensiones de conformidad con lo señalado en los artículos 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO

Esta Sala analizará, si se declara la ineficacia del traslado de la demandante Blanca Doris Ramírez Sosa, con el consecuente regreso al RPM administrado por Colpensiones, y, si es así, establecerá sus consecuencias.

3.3 HECHOS RELEVANTES PROBADOS

De acuerdo con el acervo probatorio arrojado, no hay duda que la demandante nació el 27 de octubre de 1961 como se observa en su cédula de ciudadanía (folio 14 archivo 02Demanda); se afilió al RPM hoy administrado por Colpensiones, el 28

de octubre de 1985, como se infiere de la historia laboral expedida por Colpensiones (folios 60 a 64 archivo 04ContestacionColpensiones); y posteriormente se trasladó al RAIS administrado por Protección S.A., el 1° de enero de 1997 mediante formulario No. 5549 del 21/11/1996; (folios 21-22 archivo 05ContestacionProteccion) y presentó solicitud de traslado a Colpensiones, la cual fue resuelta de manera negativa el 1° de febrero de 2021 (folio 46 archivo 002Demanda)

6

3.4 INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.

El primer aspecto es recordar que, según el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la selección de cualquiera de los regímenes previstos en el literal a) de esa disposición es libre y voluntaria, de manera que, cuando un empleador o cualquier persona natural o jurídica, desconozca ese derecho, se acreedor a las sanciones del inciso 1o del artículo 271 de la misma ley, de acuerdo con ella, cualquier persona que atente contra el derecho del trabajador a su afiliación, traerá como consecuencia que la afiliación quedará sin efecto.

Lo segundo es que, aunque la afiliación es libre y voluntaria, las administradoras de pensiones están compelidas a cumplir con el deber de información, de modo que la decisión de traslado esté precedida del cumplimiento de ese mandato.

Ahora, según el artículo 97, numeral 1.o del Decreto 663 de 1993, las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar información necesaria y transparente a los afiliados, «de suerte que les permita, mediante elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y tomar decisiones informadas».

Por información necesaria, la Sala de Casación Laboral ha afirmado que comprende:

(...)la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones», y respecto a la transparencia, ha explicado que implica la obligación de dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, «los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios» (CSJ SL1452-2019, reiterada en SL1688-2019 y SL1689-2019).

El fondo de pensiones es responsable de proporcionar e indicar al usuario que pretende trasladarse de régimen, los elementos determinantes para tomar una decisión informada. En ese orden, el traslado no surte efectos cuando se le oculta información o no se le brinda en forma completa, porque en ese caso no existe una decisión verdaderamente libre y voluntaria, ya que la determinación de trasladarse de régimen pensional puede variar según la información que se brinde (sentencias CSJ SL373-2021 MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo; CSJ SL12136-2014 MP Elsy del Pilar Cuello Calderón y CSJ SL17595-2017 sentencia de instancia)

Por lo tanto, no es posible evidenciar un verdadero consentimiento informado en quien carece de los elementos suficientes para adoptar una decisión adecuada a sus circunstancias particulares, de manera que es insuficiente afirmar que el afiliado expresó su voluntad al permanecer en el RAIS y que su vinculación conserva validez, cuando la administradora incumplió la obligación de brindarle la información necesaria, en obediencia a lo establecido en los artículos 2 y 12 del Decreto 663 de 1993.

Así, cuando el afiliado alega la falta de información o la mala entrega de esta por parte de la AFP, como ocurre en este caso, la administradora tiene sobre sí la carga de demostrar el cumplimiento de esa obligación, por cuanto: *«la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo»* (artículo 1604 CC).

De tal manera que, al haberse indicado por la actora que *«no recibió la información»*, por tratarse de una negación indefinida, lo releva de probar ese hecho y a su vez, traslada la carga de la prueba en el demandado, quien deberá probar en contrario, es decir, que sí proporcionó la información completa y suficiente, en las etapas preparatorias y previas al traslado.

Así, se reitera que la carga de la prueba, sin importar la circunstancia particular del afiliado, está a cargo de las AFP, toda vez que: (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento, y (iii) no es razonable invertir la carga de la prueba en contra de la otra parte de la relación contractual, ya que las

entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia respecto al afiliado lego (CSJ SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019 y SL4426-2019).

En ese orden, la constatación de que se cumplió con el deber de información es ineludible, por lo que la simple firma del formulario de afiliación es insuficiente para acreditar el consentimiento informado del afiliado. Este es el criterio postulado por la CSJ en su Sala Laboral, en la sentencia SL19447-2017:

el acto de afiliación o traslado de régimen pensional debe estar acompañado de la decisión libre y voluntaria del afiliado, la cual no se limita a la simple manifestación de quien decide trasladarse, sino que debe ajustarse a los parámetros de libertad informada, es decir, la solicitud y trámite de traslado de régimen pensional, debe estar precedida de una información clara, comprensible y suficiente, sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea» (CSJ SL7561-2021, CSJ SL5595-2021, CSJ3719-2021),

Ahora, el hecho de que el afiliado hubiese suscrito el formulario de vinculación o que en el mismo se empleen leyendas o afirmaciones tales como que «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares que suelen consignarse en los formatos preimpresos, no liberan a las AFP de su obligación de cumplir de manera rigurosa y de buena fe su deber de información. A lo sumo, estas expresiones sirven para acreditar un consentimiento sin vicios, pero no uno debidamente informado (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020).

Se insiste, que las AFP cumplan el deber de información y su acreditación en el proceso no se puede demostrar con las simples manifestaciones genéricas del afiliado de aceptar las condiciones del traslado, pues ellas son insuficientes ya que quien debía probar la diligencia y cuidado era quien estaba obligado a emplearla, en este caso la administradora del fondo pensional (CSJ SL4964-2018).

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de Pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, era Protección S.A., quien debía probar en el proceso que brindó una asesoría personalizada y completa a la demandante al momento de su traslado, analizando las circunstancias particulares de su caso.

Y, es que las AFP desde su creación, tienen el deber, de suministrar información objetiva, comparada y transparente sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, como de ello da cuenta el artículo 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, en armonía con el artículo 13, literal b) de la Ley 100 de 1993 (CSJ: SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL3464-2019, SL4360-2019, SL2611-2020, SL4806-2020 y SL373-2021).

9

Deben informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del SMLMV a la fecha de expedición de la L.100/93, actualizado con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), debe seguir cotizando, si es o no beneficiario del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de traslado de régimen pensional, para que la misma sea realmente libre y voluntaria.

Y es que debe reiterarse que, la labor del funcionario del fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “*deber del buen consejo*”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, en la medida que es responsabilidad de dichas administradoras y de sus promotores, velar por la información suministrada a sus usuarios -art. 10 D.720/94- por el cual se reglamentaron los artículos 105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, si bien Protección S.A. afirmó al contestar la demanda que a la actora se le brindó la asesoría requerida para el caso (folio 4 Archivo 05ContestacionProteccion), de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita, tenía la carga de acreditarlo, sin embargo, no aportó prueba que dé cuenta de la información realmente suministrada a la demandante en ese momento, adicional que, como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de **la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado de régimen pensional**, y no con posterioridad a aquel.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió uno de los presupuestos para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, esto es, el deber de información, cuya ausencia, dada su incidencia en el derecho pensional, trae como consecuencia la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes de aquella como que la demandante nunca se trasladó al RAIS. Razón por la que en este punto se confirmará la decisión.

3.5 CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DEL TRASLADO.

La declaratoria de ineficacia implica que las cosas vuelven al mismo estado en que se hallarían de no haber existido el cambio, esto es, se priva de todo efecto práctico al traslado *«bajo la ficción jurídica de que aquella nunca se trasladó al RAIS o, más bien, siempre estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida»* (CSJ SL1689-2017).

Por lo tanto, considera la Sala que al declararse la ineficacia del traslado de la demandante del RPM al RAIS, todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante; por lo que es legítimo que Protección S.A. traslade a Colpensiones no solo el saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, sino también, los porcentajes destinados a gastos de administración, primas de seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados, como ha determinado la jurisprudencia uniforme de nuestro órgano de cierre jurisdiccional desde la sentencia con Rad 31989 del 9 de sept/08, M.P. Eduardo López Villegas, reiterada en las SL 4989 y 4964 del 14 de nov/18, radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, SL 1688 del 8 mayo/19, SL 2877 del 29/07/2020, Rad. 78667, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, SL 3034 Rad. 86961 del 07/07/2021; 3571 Rad. 88476 del 04/08/2021; 3708 Rad 88556 del 18/08/2021; 3709 Rad. 88875 y 3710 Rad. 88550 del 18/08/2021; 3769 Rad, 84296 del 11/08/2021, SL755 Rad 90519, SL756 Rad 90548 del 09/03/2022 y SL1019 Rad 87915 del 16/03/2022, M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz; y SL843 Rad 85499 del 16/03/2022 M.P. Gerardo Botero Zuluaga. Debiéndose aclarar en este punto la sentencia de primer grado en el sentido que el saldo total de la cuenta de ahorro individual incluye también los rendimientos.

Según el grado jurisdiccional de consulta favorable a Colpensiones, la Sala confirmará el fallo de primer grado que precisó que las obligaciones de traslado que recae el fondo privado se deberán realizar en los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia –art. 16 Decreto 692 de 1994–.

Así mismo, se confirmará la sentencia de primer grado que dispuso que el traslado de los recursos que realicen los fondos privados deberá hacerse con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones-, esto es, entregando la historia laboral de la afiliada con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, especificando cada valor, “...*junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen ...*”.

11

3.6 PRESCRIPCIÓN

No se llama a prosperar la excepción de prescripción por cuanto la acción sobre el traslado de régimen pensional guarda relación inescindible con los requisitos y valor de la pensión, por lo que se debe predicar la imprescriptibilidad de la acción, ver al respecto Sentencia SL-1421 de 2019, Radicado No. 56174 de 10 de abril de 2019.

En efecto, de manera reiterada y pacífica, la SCL de la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que de ello surjan.

Conforme con las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia revisada en apelación y consulta se confirmará.

Costas de segunda instancia a cargo de Colpensiones y en favor de la demandante por no prosperar el recurso de apelación. Las agencias en derecho se fijan en \$1.160.000.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

12

PRIMERO: **Confirmar** la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, el 28 de noviembre de 2022 y revisada en apelación y consulta.

SEGUNDO: Costas de segunda instancia a cargo de Colpensiones y en favor de la demandante por no prosperar el recurso de apelación. Las agencias en derecho se fijan en \$1.160.000.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ